



Una Mirada al 2016 y un Vistazo a lo que está por Venir

El año 2016 fue un año de crecimiento para la Coalición y para el movimiento. Ayudamos a transformar el debate sobre la financiación del desarrollo poniendo en evidencia que los derechos humanos ya no pueden ser ignorados. Incorporamos a nuevos grupos en esta lucha, evitamos la erosión de algunas normas a la vez que fortalecimos otras, y trabajamos juntos para prevenir las violaciones de los derechos humanos.

Conforme arranca el año 2017, nos enfrentamos a desafíos aún mayores. Nuestros miembros y aliados en todo el mundo están presenciando un rápido retroceso de las protecciones sociales y ambientales. Las comunidades marginadas están bajo ataque, mientras que numerosos gobiernos abusan de los derechos humanos fundamentales. Mientras tanto, los inversionistas están presionando por una participación cada vez mayor del sector privado en el desarrollo y por un mayor y más rápido crecimiento en los sectores de infraestructura, energía e industrias extractivas.

Sin embargo, este extraño nuevo mundo no nació en un instante, sino que se ha ido transformando lentamente a lo largo del tiempo. La reciente agitación política en países como Brasil y Estados Unidos y los

Continúa en la página 5

Alianzas con Comunidades para Defender los Derechos Humanos



Las comunidades deberían llevar las riendas de los procesos de desarrollo y los proyectos que tendrán un impacto sobre ellas. Con demasiada frecuencia, las personas se ven excluidas de las decisiones de desarrollo y no tienen conocimiento de los planes de desarrollo hasta que llegan las excavadoras. En 2016, la Coalición lanzó nuestras Asociaciones de Participación Comunitaria para contrarrestar esto. Estas asociaciones conectan las luchas de la comunidad con recursos estratégicos y el apoyo para campañas, y aportan los conocimientos de la comunidad para influir en nuestras estrategias y labor normativa. En 2016, establecimos asociaciones con comunidades de Kenia, Nigeria, Bangladesh, Senegal y Malawi, y empezamos a trabajar con comunidades de Camerún y la República Democrática del Congo.

En abril de 2016, [Citizens For Justice Malawi](#), en colaboración con [International Accountability Project](#) y con el apoyo de la Coalición, trabajó con el [Sistema de Alerta Temprana](#) para informar a las comunidades en el oeste de Malawi sobre un [Proyecto Hidrológico](#) de US\$71 millones financiado por el Banco Mundial. Se prevé que la construcción de la presa multiuso Diamphwe y la infraestructura asociada afecte a 6.015 personas. Utilizando la investigación participativa, Citizens for Justice trabajó con las comunidades para documentar la falta de acceso a información y consultas significativas, así como graves fallas en el plan de reasentamiento propuesto en el proyecto. Tras mantener una relación constante con los funcionarios del Banco, las comunidades lograron retrasar el plazo para la consideración

Continúa en la página 5

Fortaleciendo las Salvaguardias del Banco Mundial



En agosto, el Banco Mundial concluyó un proceso de 4 años de revisión de sus políticas de “salvaguardias” sociales y ambientales, diseñadas para asegurar que las actividades de desarrollo financiadas por el Banco no causen daño a las comunidades ni al medio ambiente. Aunque esperábamos que esta revisión presentara una oportunidad para reforzar las salvaguardias, terminamos luchando una prolongada batalla para impedir su desmantelamiento. Miembros de la Coalición de todo el mundo participaron en consultas, desarrollaron análisis y estudios de casos y llevaron a cabo [actividades de incidencia](#) con funcionarios gubernamentales y representantes y directores del Banco Mundial.

Trabajando con el apoyo de nuestros aliados pudimos derrotar algunas de las propuestas más atroces, incluyendo una disposición que habría permitido a los países “optar” por no aplicar las protecciones para los pueblos indígenas. También logramos mejoras notables, como una cobertura más amplia de los impactos sociales, nuevas disposiciones para prevenir la discriminación, y la inclusión de lenguaje sobre la prevención de represalias. Pero a pesar de que se amplió el alcance del nuevo [Marco Ambiental y Social](#), su eficacia general [quedó en entredicho](#). El nuevo marco pasa de un sistema basado en el cumplimiento con requisitos y plazos claros para la planificación y la presentación de informes a un marco más flexible de “gestión adaptable”. En varias áreas, se eliminaron requisitos clave para la supervisión y la debida diligencia del Banco, mientras que la responsabilidad de diversos aspectos de la evaluación, la presentación de informes y la supervisión fue transferida del Banco al prestatario. Este cambio presenta riesgos reales para las comunidades afectadas y plantea serios desafíos para la implementación.

El Banco ahora está trabajando en la elaboración de las directrices y los procedimientos que ayudarán a implementar el nuevo marco de políticas. En 2017 trabajaremos para influir en el desarrollo de las notas de orientación y las herramientas de implementación para cerrar algunas de las brechas en la política y fortalecer la implementación.

Promoviendo la debida diligencia de los derechos humanos

Los proyectos de desarrollo no deberían tener efectos adversos sobre los derechos humanos. Pero cuando los gobiernos y los bancos evalúan los riesgos de una determinada actividad de desarrollo, a menudo no consiguen anticipar totalmente cómo ese proyecto afectará a la vida de las personas. El marco de derechos humanos puede proporcionar una herramienta crítica para ayudar a los profesionales a identificar la variedad de impactos potenciales de una propuesta de desarrollo, y evaluar qué impactos son aceptables y cuáles no. Con la adopción de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha adquirido un impulso considerable el concepto de las obligaciones de los inversionistas de adoptar la debida diligencia para garantizar que sus actividades no están causando o contribuyendo a violaciones de derechos humanos. El año pasado, la OCDE elaboró [nuevas directrices](#) para las agencias de crédito a la exportación en relación con la

If the answer below is selected, then the topic is the right element to be reviewed or reviewed by the project and displayed in the EIA	Physical Impacts		Social Impacts		Cultural Impacts		Environmental Impacts		Other Impacts	
	Physical	Social	Cultural	Environmental	Other	Physical	Social	Cultural	Environmental	Other
Q3. Could the project involve or affect budgets, facilities, institutions, programs or policies concerning any of the following basic services?	ES Education	ES Health	ES Housing	ES Social security	ES Water or sanitation					
Q4. Could any of the following apply to the project?	ES Physical footprint	ES Emissions or carbon sinks	ES Lands or natural resources	ES Indigenous Peoples, their lands, or cultural practices	ES Financial instruments					
Q5. Could the project involve any of the following goods or services?	ES Information and communications tech	ES Goods, activities or services with direct impact	ES Labor or trade	ES Labor or employment	ES Security personnel					
Q6. Could the project involve any of the following activities or events?	ES Recruitment	ES Security personnel	ES Influx or outflow of people, laborers, etc.							
Are there risks or issues in the country context or project area related to (people) that may be relevant to the project?	ES Definitely	ES Probably	ES Not Sure							

debida diligencia en materia de derechos humanos, mientras que varios países y financiadores del desarrollo adoptaron [compromisos sobre debida diligencia de derechos humanos](#). Sin embargo, la puesta en práctica de estos compromisos políticos sigue siendo un gran desafío. La Coalición ha estado desarrollando herramientas para mostrar a los

Continúa en la página 3

El Primer Año del Nuevo Banco de Desarrollo



En 2016, el [Nuevo Banco de Desarrollo](#) (NBD) establecido por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebró su primer año de operaciones. El banco, cuyo objetivo es financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en economías de mercados emergentes y países en desarrollo, puso en marcha sus primeros proyectos, desarrolló y publicó una política social y ambiental y celebró su primera reunión anual. A pesar de que su [primer año de operaciones](#) ha mostrado algunos aspectos positivos, entre ellos un primer enfoque en proyectos de energía a pequeña escala, los grupos de la sociedad civil han planteado [serias dudas](#) sobre si el NBD podrá cumplir con su mandato de sostenibilidad. En particular, hay preocupaciones importantes con respecto a la falta de transparencia o compromiso del NBD con la sociedad civil, así como la falta de sólidas salvaguardias sociales y ambientales y procesos de gestión.

El Grupo de Trabajo de la Coalición dedicado a los BRICS trabajó a lo largo del año monitoreando la evolución del NBD y participando en iniciativas de incidencia con los gobiernos de países BRICS y funcionarios del banco. A través de compromisos estratégicos en [São Paulo](#), [Shanghai](#), [Delhi](#), [Washington](#), y [Goa](#), los miembros del grupo de trabajo hicieron presión para varias [demandas clave](#), como que el Banco establezca criterios de sostenibilidad, instituya procesos de compromiso significativo con las comunidades afectadas y la sociedad civil en los niveles de proyecto y política, y que desarrolle un sólido marco de políticas que cumpla las normas internacionales y refleje las mejores prácticas. Con los planes del Banco de ampliar la concesión de préstamos, expandiéndose más allá de los países BRICS y al sector privado, trabajaremos en 2017 para construir bases más sólidas de rendición de cuentas en los países miembros del NBD para presionar por una revisión del marco de políticas del Banco, delinear la estrategia de la institución e influir en la selección y ejecución de proyectos.

Debida diligencia, *viene de la página 2*

gobiernos y a los bancos de desarrollo cómo incorporar los derechos humanos en sus sistemas de gestión de riesgos sociales y ambientales. Este año, además de fortalecer las disposiciones sobre evaluación de impacto social en las nuevas salvaguardias del Banco Mundial, obtuvimos [mejoras en los procedimientos de debida diligencia](#) en la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de Estados Unidos (OPIC, por sus siglas en inglés) al tiempo que iniciamos discusiones con varios otros financistas. A principios de 2017 planeamos finalizar nuestra Herramienta en línea para el Análisis de Riesgos en Derechos Humanos y lanzar una serie de talleres con instituciones financieras de desarrollo alrededor del mundo.

Miembros en el Punto de Mira



En 2016, el miembro de la Coalición Inclusive Development International (IDI) lanzó la Iniciativa Siga el Dinero a la Justicia, una nueva herramienta para combatir la ocupación de tierras y otros abusos corporativos. Detrás de muchos proyectos de inversión dañinos se encuentra una red de actores, incluyendo corporaciones locales y transnacionales y sus subsidiarias, inversionistas de capital y de deuda, incluyendo bancos de desarrollo, comerciantes de materias primas, refinadores y minoristas. Muchos de estos actores pueden ser aprovechados, incluso a través de la incidencia o la campaña, por su influencia para asegurar que los derechos humanos sean respetados o que las violaciones sean reparadas. Pero estas cadenas de inversión son casi siempre invisibles para las comunidades afectadas.

A solicitud de los defensores locales, IDI identifica actores clave y puntos de presión a lo largo de la cadena de inversiones de un proyecto determinado para revelar nuevas oportunidades de incidencia que las comunidades pueden aprovechar para defender sus derechos humanos y el medio ambiente. IDI también ha creado un recurso en línea, www.followingthemoney.org, que contiene una guía paso a paso para los defensores sobre cómo llevar a cabo la investigación y el análisis de las cadenas de inversión y cómo elaborar estrategias eficaces de incidencia.

Protegiendo a los Defensores de los Derechos Humanos



Los ataques a individuos y comunidades que denuncian actividades dañinas de desarrollo están en auge. En un [informe de 2016](#), Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, advirtió de una “alarmante tendencia de violencia, intimidación, acoso y demonización de que son objeto los grupos y personas valientes que se esfuerzan por defender y promover los derechos ambientales y territoriales”. Según el grupo de vigilancia Global Witness, [más de tres](#) defensores de los derechos humanos ambientales mueren cada semana. La mayoría de los que sufren amenazas se opone al acaparamiento de tierras, las industrias extractivas y otros proyectos de desarrollo a gran escala. En todo el mundo, el espacio para que la sociedad civil se involucre o plantee preocupaciones sobre los procesos de desarrollo [se está reduciendo](#) a medida que los gobiernos criminalizan la disidencia y promulgan leyes que restringen la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar.

Para hacer frente a esta crisis cada vez más grave, la Coalición lanzó en 2016 una [campana global](#) para presionar a los financiadores del desarrollo para que respeten los derechos humanos, promuevan un ambiente propicio para el desarrollo participativo y protejan a los defensores ambientales y de derechos humanos. Los miembros de la

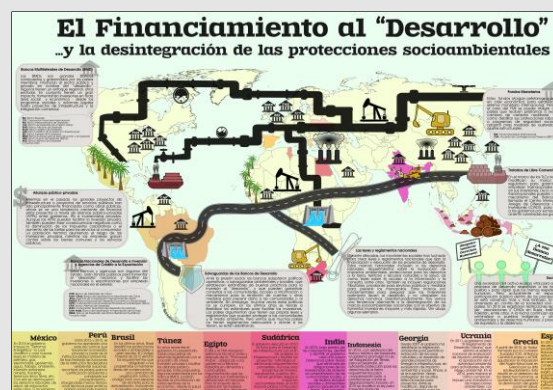
Coalición y sus aliados realizaron actividades de incidencia con bancos multilaterales de desarrollo y usaron comunicaciones estratégicas para resaltar las recomendaciones de la campaña y ampliar las voces de los defensores.

Tras el trágico asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, miembros de la Coalición se unieron a los movimientos sociales hondureños [para presionar](#) al Banco Holandés de Desarrollo (FMO), al financiador de desarrollo finlandés FinnFund y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a que retirasen su financiación a Agua Zarca, suspendieran su financiamiento en Honduras de otros proyectos que atentan contra los derechos humanos y aprovecharan su influencia para conseguir que se haga justicia por el asesinato de Cáceres. FMO, FinnFund y el BCIE suspendieron su financiamiento y FMO y FinnFund comprometieron a retirar su financiamiento. La Coalición y otros grupos [presionaron a FMO](#) para que [desarrollara mecanismos de salvaguardia](#) para los defensores de los derechos humanos. Se queda mucho más por hacer, pero en enero, FMO adoptó una [declaración política](#) “reconociendo la necesidad de proteger las voces disidentes”. Logramos presionar a los mecanismos independientes de rendición de cuentas del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a desarrollar protocolos que garanticen que las personas y comunidades que presentan quejas contra proyectos de desarrollo estén protegidas contra las represalias.

En 2017, trabajaremos para fortalecer la capacidad de los grupos de la sociedad civil para salvaguardar a los defensores en el contexto de los procesos de desarrollo. Ampliaremos nuestra labor de incidencia con las agencias bilaterales y los bancos de desarrollo para que mejoren sus políticas y prácticas, y reuniremos un compendio de estudios de casos para ilustrar la conexión entre los defensores de derechos humanos y el financiamiento para el desarrollo, así como estrategias efectivas de salvaguardia.

Las Finanzas para el Desarrollo y el Desmantelamiento de las Protecciones Sociales y Ambientales

Asegúrese de revisar nuestros [carteles con infografías](#) que explican la conexión entre las finanzas del desarrollo y el desmantelamiento de las protecciones sociales y ambientales en todo el mundo. Puede encontrar estas y otras herramientas en nuestra [biblioteca de recursos en línea](#).



Ampliando Nuestras Filiales y Profundizando las Raíces



En 2016, la Coalición creció hasta reunir a 70 miembros en todo el mundo. Ampliamos nuestro Secretariado Internacional para incluir a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) en Argentina, donde trabaja Gonzalo Rosa, e International Accountability Project en Washington DC, que cuenta con Ann Perreras. En 2017, la Coalición ampliará su Secretariado para incluir una o más nuevas regiones.

En septiembre fuimos transferidos a un patrocinador fiscal independiente: Social and Environmental Entrepreneurs, en Calabasas, California. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) que ejerció como nuestro patrocinador fiscal durante nuestro período de lanzamiento. También estamos agradecidos a nuestros miembros salientes del Comité Directivo: Vladimir Cuk, con International Disability Alliance; Melania Chiponda, con el Fondo de Desarrollo Comunitario Chiadzwa, y Emmanuel Saffa Abdulai de Society for Democratic Initiatives.

El Comité Directivo para 2017:

Prabindra Shakya, Asia Indigenous Peoples Pact; Pía Marchegiani, Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Ryan Schlieff, International Accountability Project; Manana Kochladze, CEE Bankwatch; Jessica Evans, Human Rights Watch; Carla Garcia Zendejas, Center for International Environmental Law; Ramesh Sharma, Ekta Parishad; Rayyan Hassan, NGO Forum on ADB; Aly Sagne, Lumiere Synergie pour le Développement; Mariana González Armijo, Fundar Centro de Analysis; Juana Kweitel/Caio Borges, Conectas Direitos Humanos.

Una Mirada al 2016, viene de la página 1

continuos cambios en el mapa de poder geopolítico necesariamente requerirán que adaptemos nuestra forma de trabajar.

Pero también confirman la evaluación estratégica básica que sustentó la propia creación de la Coalición: para cambiar el modelo de desarrollo necesitamos un frente unido que cruce fronteras geográficas y temáticas, tenga sus raíces en el Sur Global y sea capaz de impulsar la rendición de cuentas a través de una diversidad de canales para que los financistas, los gobiernos y las empresas respondan por sus acciones. Continuaremos recurriendo a las instituciones y los gobiernos dondequiera que sean estratégicos, pero sabemos que el verdadero poder recae en las comunidades y los movimientos sociales. Debemos apoyar y fortalecer ese poder popular. La lucha por los derechos humanos en el desarrollo no será fácil en 2017, pero es más importante que nunca.

*En Solidaridad,
Gretchen Gordon, Coordinadora*

Alianzas con Comunidades, viene de la página 1

del proyecto, asegurando un margen de tiempo para que sus preocupaciones sean escuchadas y para la reconsideración del plan de reasentamiento.

Las comunidades indígenas de la región de Chittagong Hill Tracts en Bangladesh se preocuparon cuando se enteraron de un [proyecto](#) financiado por el Banco Mundial para planificar una ampliación de carreteras y un puerto a través de su territorio. A pesar de los graves riesgos potenciales para sus derechos a la tierra, los recursos forestales y la cohesión social, los pueblos indígenas no fueron informados sobre el proyecto y sus líderes fueron excluidos de las consultas. Con el apoyo de la Coalición a través del [Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia](#) (AIPP, por sus siglas en inglés), las organizaciones de pueblos indígenas locales celebraron consultas comunitarias y realizaron su propia evaluación de impacto del proyecto propuesto. Después de que las comunidades presentaran una queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial y llevaran a cabo actividades de incidencia con la administración del Banco, el Banco anunció en octubre su desaprobación de los estudios de viabilidad y la cancelación de los planes de financiamiento futuro.

En 2017, la Coalición tiene planes de continuar fortaleciendo estas relaciones existentes mientras desarrollamos entre diez y doce nuevas alianzas. Puede leer sobre todas nuestras Asociaciones de Participación Comunitaria [aquí](#).